

**La época de los ataques por sorpresa, de las revoluciones hechas por pequeñas minorías conscientes a la cabeza de las masas inconscientes, ha pasado. Allí donde se trate de una transformación completa de la organización social tienen que intervenir directamente las masas, tienen que haber comprendido ya por sí mismas de que se trata, por que dan su sangre y su vida. Esto nos lo ha enseñado la historia de los últimos cincuenta años. Y para que las masas comprendan lo que hay que hacer, hace falta una labor larga y perseverante. Esta labor es precisamente la que estamos realizando ahora, y con un éxito que sume en la desesperación a nuestros adversarios.**

—Carlos Marx

Grupo Kapitalistate  
de la bahía de San Francisco<sup>1</sup>

## **El frustrado 18 brumario de Richard Nixon**

---

La saga de Watergate, con todas sus convulsiones y misterios, es un relato de represión política desbocada. La represión política es una característica normal de las democracias burguesas. Hay periodos en que la represión es intensa, y otros en que se suaviza, épocas en que la represión viola notoriamente las normas de la legalidad burguesa y épocas en que actúa meticulosamente sometiéndose al procedimiento legal. El Estado capitalista jamás se abstiene totalmente de la actividad represiva dirigida contra sus enemigos políticos. La represión, siempre que quede enmarcada dentro de ciertos amplios límites, y siempre que esté dirigida únicamente contra determinado tipo de objetivos, suscita escasa oposición entre los medios de comunicación del *establishment* o entre los portavoces y políticos liberales.

El gobierno Nixon desde 1969 ejerció activamente una política de premeditada represión contra la izquierda de los Estados Unidos. Organizó inquisiciones del Gran Jurado Federal en muchos lugares del país, desarrolló la vigilancia ilegal en gran escala de individuos y organizaciones radicales, liquidó prácticamente a los Panteras Negras, respondió cada vez más brutalmente a las manifestaciones políticas contrarias a la guerra de Vietnam, e instigó numerosos juicios políticos. Mientras que estas medidas encontraban la oposición de la izquierda, y eran ocasionalmente criticadas por la prensa (como ocurrió en el juicio de los 7 de Chicago), los liberales no paraban mientes en ellas.

Pero algo nuevo ocurrió al aproximarse la elección presidencial de 1972. La vigilancia y el sabotaje, que en el pasado se habían encauzado contra la izquierda, se volvieron contra el Partido Demócrata. Evidentemente, no era más ilegal el espionaje del Cuartel General del Partido Demócrata que el espionaje de las organizaciones radicales en los años anteriores. Las sucias trampas empleadas contra los candidatos demócratas no eran una violación mayor de los derechos constitucionales que la introducción de provocadores en los grupos radicales. Lo que hizo tan escandaloso el escándalo de Watergate fue el empleo de estos medios ilegales y represivos en la lucha política en el seno de la clase dirigente.

---

<sup>1</sup> Son miembros de este grupo: Sue Bessmer, Jens Christiansen, Margaret Fay, David Gold, Clarence Lo, John Mollenkopf, James O'Connor, Jeff Prager, Kay Trimmerger y Erik Wright.

Lo que era escandaloso no era ni la ilegalidad formal de las actividades *per se* ni la intensidad de la lucha política emprendida por las fuerzas de Nixon contra el *establishment* liberal, sino la combinación de los dos factores.

Evidentemente ésta no era la primera vez que se habían transgredido los límites de la represión tolerable. Veinte años antes, el senador Joe McCarthy los había violado cuando pasó del ataque a la izquierda de las universidades y a los *mass media* a atacar a los liberales y conservadores del ejército y del Partido Republicano. En circunstancias distintas, la administración Nixon pasó, a comienzos de la década de los setentas, de emplear un aparato represivo para atacar a la izquierda, a lanzar un ataque contra el Partido Demócrata. En el momento en que quedó al descubierto la magnitud del ataque, nacía la crisis política que había de conocerse como Watergate.

Esta interpretación del escándalo de Watergate plantea una serie de cuestiones importantes: 1] ¿qué factores sociales y políticos sirvieron de escenario para que la represión se extendiera más allá de los límites tolerables? 2] Una vez al descubierto el allanamiento de Watergate, ¿qué fuerzas convirtieron el desarrollo del escándalo en una grave crisis? ¿Por qué se destacaron determinados delitos y no otros? ¿Qué podemos aprender sobre el funcionamiento del aparato del Estado a partir de la evolución de la crisis?

No tenemos respuestas plenas a estas preguntas, pero sí podemos ofrecer un análisis tentativo de los temas planteados, con la esperanza de aclarar en algo la dinámica de la crisis política que enfrentan los Estados Unidos en la década de los setentas.

## I

### LA TRASCENDENCIA DE LA REPRESIÓN TOLERABLE

Cuando Marx escribió sobre la farsa del golpe de Estado de Luis Bonaparte en 1852, se enfrentaba con el difícil problema de desentrañar las fuerzas estructurales generales que subyacían a ese específico acontecimiento histórico, partiendo de las personalidades y las circunstancias específicas de los actores históricos que lo montaron. El método general con el que Marx analizó este problema fue brevemente enunciado al comienzo de su ensayo:

Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo

circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y transmite el pasado<sup>2</sup>

### *1. Procesos estructurales*

La clase dirigente de los Estados Unidos se topó directamente, en la acacia de los sesenta y a comienzos de los setenta, con circunstancias que habían conformado el desarrollo del aparato de Estado y que habían creado las precondiciones para los acontecimientos del escándalo de Watergate. Se pueden clasificar estos procesos estructurales, simplificando algo, bajo dos títulos: aquellos que afectaban la posición del capital norteamericano en la economía mundial, y aquellos que atacaban los mecanismos de control social en el interior del país.

A mediados del primer periodo presidencial de Nixon era evidente que se estaba debilitando la hegemonía norteamericana en el mundo capitalista. La fuerza de los movimientos de liberación nacional, con repercusiones más dramáticas en el sudeste asiático, significaba que el costo de la expansión imperial era más elevado de lo que habían previsto la clase dirigente y los políticos profesionales. En 1968, algunos políticos y capitalistas preconizaban, a veces públicamente, la retirada de Asia y una reevaluación de la política exterior de los Estados Unidos en otros puntos potencialmente problemáticos. Además, el creciente poder económico de otras naciones capitalistas, especialmente de Japón y de Alemania, y la amenaza de un Mercado Común Europeo ampliado y unificado, convertía en realidad el peligro de una fuerte competencia. Simultáneamente, parecía que se había agotado la capacidad de los Estados Unidos para defender su propia posición competitiva por medio de la manipulación de la economía con instrumentos económicos keynesianos. La economía expansionista de los años Johnson-Kennedy produjo un incremento en el PNB pero también aceleró la inflación. Por ello, el incremento del PNB no implicó un crecimiento significativo en la productividad. La capacidad expansiva de otras economías nacionales y el relativo estancamiento de los Estados Unidos, coadyuvaron a transformar la situación en una arena de fuerzas competitivas y desestabilizadoras que amenazaban con minar el sistema internacional en su conjunto. Estas tensiones emergieron en una serie de crisis monetarias internacionales en las que la especulación perjudicaba al dólar y favorecía al oro, al yen, al marco alemán e incluso, a veces, a la libra y la lira. Para poner las cosas todavía más difíciles para los Estados Unidos, las grandes empresas transnacionales y las instituciones financieras con sede en los

---

<sup>2</sup> C. Marx, *El 18 brumario de Luis Bonaparte*, 0-E-, t. I, p. 250, Ed. Lenguas Extranjeras, Moscú.

Estados Unidos se encontraban entre los principales especuladores.

A la creciente inestabilidad de la economía mundial la acompañaba un ascenso acelerado de acontecimientos en los Estados Unidos que amenazaban la estabilidad de la estructura social interna. A finales de la década de 1960 emerge una serie de luchas políticas: los trabajadores en general, los negros y otras minorías del tercer mundo en particular, los estudiantes universitarios, las mujeres y los homosexuales, se hicieron más militantes en su enfrentamiento con las instituciones e individuos que los oprimían. Los pobres se organizaron contra el sistema de seguridad social y contra los ghettos. Además se formaron nuevas coaliciones. Los movimientos antibelicista y ecológico, por ejemplo, no sólo incluían entre sus filas a los más oprimidos, sino también a muchos liberales que no eran del *establishment*. Por lo tanto, el ataque al orden social establecido comenzó a ganar un apoyo titubeante entre, aquellos que se encontraban más cerca de los centros de poder.

Además de estas notorias luchas políticas también se daban expresiones colectivas de un profundo descontento personal. Los trabajadores organizados, especialmente los grupos de base, demostraron una mayor militancia que a menudo se centraba en temas de carácter no tradicional. La huelga de los trabajadores de ensamblaje de la General Motors en Lordstown, Ohio, no fue más que la manifestación más notoria de un sentimiento creciente de malestar que experimentaban muchos trabajadores mejor pagados.

Para la clase dirigente todos estos fenómenos estaban interrelacionados. Aunque podía haber distintas interpretaciones respecto de las causas originarias y las consecuencias de estos hechos, existía un consenso general entre la clase dirigente de que se había producido una crisis del imperio en el exterior y una crisis de autoridad en el país. La tarea de apuntalar de alguna forma ese imperio y de restablecer la autoridad en el interior, recayó en la administración de Nixon a partir, de 1969.

## 2. *La crisis interna*

El Estado tenía tres estrategias posibles para tratar de controlar la crisis económica y social de finales de los años 60 y comienzos de los 70:

a) Podía prolongar la política existente, introduciendo ligeras modificaciones en el aparato de seguridad social como respuesta a presiones específicas. El Estado de bienestar y guerra podía persistir en cuánto respuesta básica a los problemas de la absorción de excedente y a las manifestaciones sociales y políticas del malestar laboral. Esta alternativa era propiciada por la corriente principal del Partido Demócrata y por muchos republicanos.

b] La estructura del bienestar social heredada del *New Deal* y del periodo Kennedy-Johnson podía ser empleada como una rampa de lanzamiento para el desarrollo de un complejo socioindustrial en gran escala.<sup>3</sup> Esto significaría un esfuerzo por cooptar plenamente a aquellos grupos sociales marginados por el desarrollo del capital monopólico desde el final de la segunda guerra mundial. Requeriría una vasta expansión de programas de capacitación de la fuerza de trabajo, la participación del gobierno para elevar la productividad, programas de salud, etcétera. A finales de la década de los sesenta este programa era apoyado únicamente por elementos marginales del Partido Demócrata. En 1972, un número sustancial de los partidarios de George McGovern, aunque no el propio McGovern, se inclinaba a favor de esta perspectiva.

c] La infraestructura social de la década de los años sesenta se podía dismantelar sustancialmente o al menos, incapacitar, y sustituirla por una estructura mucho más represiva de control social. Esta era, al menos oficialmente, la posición de la tendencia principal del partido republicano, y la perspectiva que Nixon adoptó cuando entró en la Casa Blanca. Esta política fue por primera vez puesta en práctica a nivel de gobierno estatal, principalmente en Nueva York y California a fines de la década de 1960. Era de aceptación general que los gobernadores Rockefeller y Reagan representaban respectivamente el ala izquierda y derecha del Partido Republicano y ambos promovieron políticas represivas sustancialmente similares.

Cada una de estas tres alternativas se enfrentaba a distintos obstáculos. Mientras que las reformas graduales y progresivas podían suscitar una mayor resistencia de los grupos políticos organizados, también eran las que ofrecían menos esperanzas a la clase dirigente de mejorar sustancialmente la situación. Después de todo, esta estrategia no había logrado evitar la crisis de los años sesenta y, en opinión de muchos, había contribuido a provocarla. Además, la estrategia necesaria para defender la hegemonía internacional de los Estados Unidos parecía pedir una deflación y una reorientación de la producción interna, más que la prolongación de la política interior existente.

La alternativa de crear un complejo socioindustrial totalmente nuevo se enfrentaba a una enorme oposición política. Muchos capitalistas sentían que sus intereses inmediatos serían

---

<sup>3</sup> Para un debate sobre el estado de bienestar y guerra [*welfare-warfare state*] sobre el complejo socioindustrial como estrategias capitalistas alternativas, véase James O'Connor, *The Fiscal Crisis of the State*. St. Martin Press, Nueva York, 1973. O'Connor considera que las tensiones sociales de la sociedad capitalista avanzada se manifiestan en crecientes exigencias sobre el presupuesto del Estado. Pero, puesto que la capacidad del Estado para obtener los ingresos necesarios es limitada, se encuentra inmerso en una creciente crisis fiscal y la estrategia capitalista se ve frecuentemente dirigida a resolver la crisis fiscal con el propósito de mejorar la capacidad del Estado para enfrentarse a la crisis social. Un objetivo de un posible complejo socioindustrial es, por ejemplo, aumentar la productividad de las actividades estatales y reducir así las exigencias del Estado sobre las fuentes de ingresos.

amenazados por un giro radical en las prioridades del gobierno. Esto era especialmente cierto para aquellos grupos capitalistas cuyos intereses estaban exclusivamente ligados al sector militar. Otros también temían que las nuevas y dramáticas aventuras sociales redujeran la capacidad del gobierno para propiciar el retorno a una estabilidad política y social que era tan desesperadamente necesaria. Los capitalistas se han marginado siempre de aquellas nuevas empresas en la política estatal sobre las que se consideran incapaces de ejercer un control sustancial. La nueva carga en el presupuesto del gobierno, la posibilidad de movilizar a grupos a los que hasta entonces se había negado acceso al proceso político organizado, y la amenaza de modificaciones en la legislación sobre imposición fiscal y en la actividad reguladora del Estado, produjeron un frente casi unitario del capital contra el proyecto de desarrollar un complejo socioindustrial, aunque este habría beneficiado a largo plazo sus intereses. Los dirigentes de la clase trabajadora organizada, que también tendían a sentirse amenazados por estas nuevas empresas políticas, se sumaron a la postura de oposición. A pesar de sus múltiples quejas sobre la dirección política del país, los dirigentes obreros todavía consideraban que sus intereses coincidían fundamentalmente con la corriente principal del Partido Demócrata.

Finalmente, el esfuerzo por dismantelar la infraestructura social existente, la tercera alternativa, se enfrentaba con los impedimentos de una burocracia federal atrincherada, con un interés creado en mantener los programas sociales de los años sesenta, y con un sistema congresista, de partido y burocrático, cuya legitimidad estaba fundamentada en la política de los programas federales de los grupos de intereses pluralistas. Muchos capitalistas temían que esta estrategia fuera excesivamente radical y que desembocara en una agudización de la tensión política. Y, evidentemente, los trabajadores a todos los niveles sabían que ellos tendrían que soportar la carga de esta política. Así, para implementar esta estrategia, en la práctica era necesario eludir las instituciones establecidas de la burocracia federal y esquivar el proceso pluralista del congreso y de los dos partidos políticos principales. Esto es lo que Nixon trató de hacer.

La crisis de autoridad era una de las principales cuestiones que preocupaban a Nixon. Daniel Patrick Moynihan, en esa época consejero principal de Nixon en cuestiones de política social, describe en su relato sobre la primera etapa del gobierno de Nixon, cómo la administración formulaba su política hacia los pobres.<sup>4</sup> El problema principal desde la perspectiva de Moynihan y Nixon era que los programas de los demócratas, *New Deal*, *New Frontier* y *Great Society* que en su momento fueron tan necesarios para acallar

---

<sup>4</sup> Daniel P. Moynihan, *The Politics of a Guaranteed Income*. Ed. Vintage Books, Nueva York, 1973.

el conflicto social, ahora cumplían exactamente el papel contrario. Hacían concebir la esperanza de obtener ventajas concretas que el sistema no podía conceder y politizaban a sectores de la población en formas que eran inaceptables para la mayor parte de los miembros de la clase dirigente.

Por lo tanto, estos programas ahora amenazaban la estabilidad que originalmente estaban destinados a mantener. En opinión de Moynihan, la mayor participación del gobierno en los asuntos sociales había minado los sistemas privados de autoridad (sobre todo la familia y los controles impersonales del mercado laboral) en los que descansaba la sociedad. Aunque Moynihan no emplea este lenguaje, es evidente que la administración veía la situación como potencialmente revolucionaria. En efecto, la insurrección armada en los ghettos urbanos era, a lo largo de los sesenta, una amenaza continua y a veces una realidad. La solución que Moynihan encuentra a estos problemas, y que Nixon trata de implementar, consiste en adoptar medidas políticas que refuercen los sistemas privados de autoridad, restablecer los incentivos privados allí donde la intervención estatal los ha distorsionado y descargar todo el peso del aparato represivo del Estado sobre aquellos grupos considerados como los más peligrosos.

Los presupuestos que Nixon propone a lo largo de su primer periodo presidencial y, más concretamente, durante los dos primeros años de su abortado segundo gobierno, reflejan fuertemente este intento de reorientar la política interior. El gobierno de Nixon no pretendía liquidar todas las formas de inversiones en la seguridad social. Permitía que se desarrollaran determinados programas, por ejemplo, los programas de bonos de alimentos y los programas de seguridad social que entregaban dinero en efectivo a individuos que luego adquirirían bienes en el mercado. Sin embargo, se suspendieron los programas sociales que hacían proliferar las burocracias a nivel federal y local (tales como la OEO y las Ciudades Modelos), dando lugar a un verdadero descenso neto en las inversiones sociales federales entre los años 1972 y 1975<sup>5</sup> En general, el gobierno de Nixon trató de detener la expansión de los programas sociales y, siempre que pudo los sustituyó por formas de control social con una orientación más de mercado y más abiertamente represivas.

---

<sup>5</sup> La institución Brookings afirma al analizar el último presupuesto de Nixon: En la propuesta del presupuesto para el año fiscal de 1975, la administración propone distintas medidas para redistribuir los gastos federales. Pretende acabar con el descenso del rubro de defensa en el presupuesto, proseguir con el acelerado crecimiento en fondos para pensiones y en la ayuda a la gente para adquirir los bienes necesarios, y limitar la importancia relativa del presupuesto para los programas sociales.[...] El presupuesto fiscal de 1975 propuesto por la administración no prevé casi ningún aumento en los gastos para los programas de subvenciones sociales en las áreas educativas, de desarrollo urbano, fuerza de trabajo y salubridad. El presupuesto, tomando en cuenta la inflación en los tres últimos años, de hecho entraña un descenso sustancial en el nivel real de la actividad federal en estas áreas. Si se aceptan las propuestas del gobierno, descenderá en los gastos federales a lo largo de la década la parte relativa a la partida de programas sociales. (Barry M. Blechman, Edward H. Gramlich y Robert W. Hartman, *Setting National Priorities: The 1975 Budget*, Brookings Institution, Washington, D. C., 1974, pp. 13-14.



### *3. La defensa del imperio*

La defensa del imperio se emprendió simultáneamente por medios económicos y políticos. En el terreno político, los Estados Unidos tuvieron que modificar su estrategia tanto respecto de los países subdesarrollados como respecto de sus rivales imperialistas. Una acometida de mayor envergadura de la política exterior, consistió en sacar a los Estados Unidos de su papel directamente militar, costoso y desastroso, en el sudeste asiático y mantener al tiempo una presencia política sustancial. Con este fin, el gobierno norteamericano adoptó una nueva estrategia de Estados subimperialistas en distintas partes del mundo. Se esperaba que el gobierno de Saigón podría llegar a jugar este papel en el sudeste de Asia. Simultáneamente, Europa occidental y Japón recibían el mensaje de que los Estados Unidos consideraban que su poder recientemente adquirido implicaba una mayor competencia y una menor cooperación. Este mensaje adquirió mayor peso por la mejoría de las relaciones de los Estados Unidos con la URSS y China. De esta forma, se minaron las viejas formas de alianzas colectivas y fueron sustituidas por negociaciones conducentes a acuerdos diplomáticos bilaterales.

La administración de Nixon trató de mantener la posición de los Estados Unidos como potencia económica mundial dominante. Algunas de las políticas empleadas eran predominantemente defensivas, elaboradas con el propósito de eliminar y reducir las amenazas hacia las empresas transnacionales con sede en los Estados Unidos y hacía el papel del dólar en las finanzas internacionales. Se previeron otras actividades con el propósito de redefinir el papel de los Estados Unidos en las relaciones económicas mundiales y de restablecer la incuestionable hegemonía norteamericana.

Los primeros pasos de la política del gobierno de Nixon tras su toma de poder en 1969, consistieron en promover una recesión con el propósito de atajar las violentas demandas salariales que se habían acelerado por la inflación derivada de Vietnam y de defender al dólar por medio de diversos arreglos ad hoc. Estas dos medidas no fueron más que paliativos temporales y, a partir de mediados de 1971 el gobierno se hizo más agresivo y avanzó en nuevas direcciones. Trató de restringir los salarios por medio de una combinación de controles directos y de una reducción en los gastos sociales.<sup>6</sup> Simultáneamente con el abandono forzoso del sistema de la cuota fija de intercambio, se proyectaron dos de-

---

<sup>6</sup> Como se planteó anteriormente en este artículo, Nixon consideraba que los programas sociales del gobierno habían contribuido a minar la disciplina del mercado laboral y a reducir los efectos del ejército industrial de reserva. La reducción de este tipo de gastos podría considerarse como un intento por reforzar algunos de los mecanismos que han restringido tradicionalmente a los salarios. Véase James O' Connor, "Nixon's Other Watergate: The Federal Budget for fiscal 1974", *Kapitalistate*, n. 2, 1973.

valuaciones sucesivas del dólar y una vigorosa política de promoción de las exportaciones, con el propósito de invertir la balanza de pagos y mantener, e incluso incrementar, la presencia norteamericana en los mercados extranjeros.

Las consecuencias de estas acciones fueron mixtas. En 1973 la balanza de pagos había conseguido un ligero excedente, interrumpiendo con ello, al menos temporalmente, los enormes déficits de los años anteriores. El incremento en los precios del petróleo que comenzó en 1973 no tuvo un efecto tan adverso en la balanza de pagos de los Estados Unidos como lo tuvo para otros países capitalistas avanzados, porque los Estados Unidos importan un porcentaje mucho menor del petróleo que consumen. Incluso durante un tiempo, el dólar pudo ser definido como una moneda fuerte.

Los salarios se mantuvieron bajo control, pero los intentos de estimular la productividad interna tuvieron un éxito menor. Las devaluaciones y los estímulos a la exportación contribuyeron a revitalizar la inflación, especialmente en los productos alimenticios, ya que era menor la parte de la producción agrícola disponible para el consumo interno. Era evidente que se estaba forzando a la clase trabajadora a cargar con el esfuerzo de intentar recuperar la hegemonía mundial, puesto que sus salarios reales estaban siendo atacados desde distintos puntos. Pero no había en absoluto certeza de que el intento fuera o no a tener éxito, y sí había una cierta sensación entre la clase dirigente de que Nixon no era capaz de poner en práctica esta difícil tarea, especialmente al agravarse la crisis de Watergate.

También existía una serie de rasgos estructurales que contribuyeron a evitar un consenso político entre la clase dirigente. Las empresas transnacionales han adoptado progresivamente una perspectiva que ya no establece distinciones entre el mercado nacional y el internacional, las fuentes de capital, las materias primas y la fuerza de trabajo explotable. Las inversiones extranjeras de las transnacionales no sólo contribuyeron al déficit de la balanza de pagos, lo que a su vez era una amenaza a su propia expansión, sino que las propias corporaciones eran líderes en la consecuente especulación contra el dólar. Se produjo una tendencia a la reducción de la ocupación para los obreros norteamericanos y un constreñimiento de los mercados para pequeñas empresas domésticas que abastecían a las grandes corporaciones, en la medida en que la producción huía hacia paraísos extranjeros con una mano de obra barata. La estricta política monetaria prevista para combatir la inflación y proteger el dólar provocó estragos en los mercados de capital internos y perjudicó especialmente a la industria de construcción. Tras las devaluaciones, parte del capital extranjero comenzó a venir a Estados Unidos trayendo consigo algunos

puestos de trabajo y mercados. Pero mucho de este creciente flujo de capital se invirtió en bienes raíces, en la agricultura, en espectáculos, hoteles y pequeños bancos y llevó a un conflicto directo dentro de Estados Unidos entre los capitalistas con intereses extranjeros y los capitalistas con una orientación interna.

#### *4. Estrategias políticas*

Aunque muchos capitalistas con raíces regionales y nacionales y gran parte de los trabajadores sindicados se sentían extremadamente amenazados por el poder de las empresas transnacionales, el gobierno Nixon encontró escasa oposición organizada contra sus intentos de crear un mercado mundial más armónico e integrado, en donde las empresas transnacionales norteamericanas gozaran de una cierta independencia. Sin embargo, el gobierno Nixon enfrentó una considerable oposición de la izquierda y de muchos liberales respecto de la prolongación de la guerra de Vietnam y de sus intentos por reducir la seguridad social. Como expusimos anteriormente, la forma principal de tratar a la oposición de izquierdas fue la represión sistemática. A la oposición liberal se la contendría siguiendo tres estrategias políticas.

En primer lugar, el gobierno Nixon hizo un esfuerzo premeditado para minar el poder del Congreso. No hace falta decir que el poder del Congreso se había erosionado gradualmente a lo largo de los últimos cincuenta años, y sería un error atribuir su debilidad a una administración concreta. Cuando asumió el poder, el Congreso todavía ejercía una influencia residual en las decisiones políticas, especialmente en algunas áreas de cuestiones internas. El Congreso seguía siendo una institución fundamental mediadora en la fragmentación de los intereses capitalistas que había caracterizado durante tanto tiempo al Estado norteamericano. El continuo uso del veto por parte de Nixon, su congelación de fondos autorizados por el Congreso, su creación de una multitud de nuevos puestos ejecutivos que no están sometidos al control del Congreso, su negativa a conceder fácil acceso a la Casa Blanca a líderes del Congreso, así como su desvinculación de la política legislativa, todo ello representaba un intento de centralizar los poderes en el Ejecutivo, con el propósito de socavar el papel del Congreso en la elaboración de la política del Estado.

En segundo lugar, el gobierno Nixon trató de limitar el poder de los distintos elementos semiautónomos de la burocracia federal. Estas instituciones tenían como objetivo servir a intereses específicos y eran, junto con el Congreso, las principales manifestaciones de pluralismo en el Estado norteamericano. En cuanto tales, podían potencialmente dificultar

la estrategia política de mayor orientación de clase que favorecía el gobierno Nixon. La administración trató de soslayar a estas instituciones en tres formas distintas. En primer lugar, se le impidió acceso a la gestión política. Esto se puso en práctica despojando de las funciones asesoras a los secretarios del gabinete, los cuales estaban coartados por el control de las burocracias federales y del Congreso y atribuyendo estas funciones a colaboradores presidenciales que tenía mayor libertad para aconsejar aquello que Nixon quería oír. El ejemplo más notorio de esta política lo personifica Henry Kissinger en el periodo 1969-73. En segundo lugar, cuando Nixon asumió el poder, trató de desvirtuar el escalafón de la carrera de funcionario designando a muchos de sus fieles seguidores para puestos administrativos. Nixon pretendía debilitar, a través de estas designaciones, la semiautonomía de los departamentos burocráticos, y así socavar su validez como puntos de acceso para muchos grupos de intereses hostiles a la acometida de la nueva política de Nixon. Finalmente, la administración trató de separar a estas burocracias de los intereses pluralistas a los que habían servido. Por ejemplo, la distribución del ingreso crearía una conexión financiera directa entre el ejecutivo federal y los gobiernos locales y regionales, pasando por encima de los organismos existentes. Asimismo, el sistema de control de salarios y precios de 1971 a 1974 lo opera un organismo de reciente creación que era directamente responsable ante el presidente y no ante el Congreso o ante los organismos burocráticos ya existentes.

En resumen, Nixon debilitó determinadas burocracias federales porque su gobierno requería un poder estatal centralizado para implementar la política interior y exterior en beneficio del gran capital. Algunas de las luchas de poder entre el gobierno y el Congreso y la burocracia estaban motivadas por esfuerzos colectivos por parte de los grandes capitalistas.<sup>7</sup>

Pero la centralización en el gobierno Nixon también provenía de los deseos de Nixon y sus consejeros de monopolizar el poder político para promover objetivos personales e intereses capitalistas particulares. Este doble origen de las tendencias centralizadoras genera actitudes conflictivas en el seno de la clase dirigente. Aceptaban mayoritariamente la política de Nixon y comprendían que era necesaria la centralización de poderes en el ejecutivo para manejar los problemas cada vez más complejos de la economía mundial, pero amparaban una profunda sospecha de que Nixon y su desacreditada cohorte abusarían de la centralización del poder.

---

<sup>7</sup> Por ejemplo, la comisión Ash, integrada por destacadas figuras de las empresas y de las escuelas empresariales, propuso fortalecer la oficina de Administración y del Presupuesto, crear el Consejo Interno, y consolidar las burocracias federales en ocho superorganismos.

La tercera estrategia política empleada por el gobierno Nixon para manejar a la oposición liberal consistió en el intento de crear una nueva coalición política que apoyara el socavamiento y la destrucción parcial del estado del bienestar. Nixon movilizó este contingente utilizando en primer lugar las técnicas de los *mass media* que sus consejeros habían perfeccionado gracias a su experiencia anterior en agencias de publicidad. Tanto Nixon como su equipo de la campaña electoral desviaron la atención pública de temas tales como “pan y mantequilla” hacía temas simbólicos “gratuitos”, tales como el regreso de los prisioneros de guerra norteamericanos, retenidos por Vietnam del Norte. Además, Nixon explotó los temores de una parte sustancial de la clase trabajadora. La nueva mayoría de Nixon estaba en contra de los radicales, los hippies, los desertores, los homosexuales, las feministas radicales, los que viven de la seguridad social, los negros, otras minorías y los pobres; esta nueva mayoría veía a estos grupos como desangradores de impuestos, el origen de los crímenes en las calles, y como la causa del cuestionamiento del status profesional y de una forma ordenada de vida. Esto es lo que Murray Chotiner, llamaba la política del resentimiento. Nixon pareció tener éxito en la creación de esta coalición durante los primeros años de su gobierno.

La base de apoyo de Nixon repercutió sobre el activismo político general. La coalición no sólo se oponía a determinados grupos por la naturaleza de sus reivindicaciones y por su composición, sino también porque estos grupos eran políticamente activos. Había una actitud premeditada de desprestigiar el mismo acto de reivindicar, así como el contenido mismo de las reivindicaciones. En este sentido es significativo el nombre de la coalición, la Mayoría Silenciosa.

Las reivindicaciones simbólicas y de carácter negativo que el gobierno Nixon propiciaba no exigían costosos drenajes de los recursos fiscales del Estado. De hecho, hemos visto cómo el gobierno Nixon trataba de debilitar a los grupos pluralistas que planteaban reivindicaciones *políticas* respecto del presupuesto estatal y peticiones de que se sufragaran y concedieran subsidios que interferían con la política económica coordinada. La restricción de reivindicaciones de carácter positivo era contraria a la estrategia política de los gobiernos de Kennedy y Johnson, que pretendían controlar el descontento incrementando los gastos sociales.

Pero la estrategia de la mayoría silenciosa, en el caso de las reivindicaciones *negativas* y *simbólicas*, era una prolongación del mecanismo tradicional pluralista. La coalición de Nixon era una laxa afiliación de grupos definidos por un sinnúmero de características personales, tales como su raza, grupo étnico, afiliación religiosa, status económico o, como

en el caso de la Asociación Nacional de Tiradores, por su afición. En una coalición de este tipo cada tema provoca escisiones según las distintas tendencias. Estas divisiones garantizan que mientras que la gente expresa sus intereses, estos intereses casi nunca son definidos en términos de clase, y jamás se manifiestan en el mismo grupo de gente solidamente unida por una gama de intereses. De esta forma se ahorca separadamente a la gente, lo que garantiza que a los capitalistas no se les ahorcará juntos.

##### *5. La oposición a Nixon y la elección de 1972*

A la vista de lo anterior, el primer gobierno de Nixon se enfrentó con una mínima oposición a su programa de reorganización política, y las tres estrategias esbozadas anteriormente consiguieron contener a la oposición liberal. El Congreso consintió las continuas retenciones de fondos y fue incapaz de vencer los frecuentes vetos de Nixon incluso a una legislación que gozaba de amplio apoyo. En general, el Congreso no libró más que una mínima batalla contra los abusos del ejecutivo. Sin duda esto ocurrió porque en parte muchos políticos del Congreso aceptaban la necesidad básica de estos cambios. Pero el Congreso también se sometió debido al éxito inicial de Nixon en crear una nueva coalición.

Mientras que el gobierno de Nixon no se enfrentaba más que a una tenue oposición a su política de reorganización estructural, muchas de sus medidas políticas fundamentales habían generado una amplia oposición. Como lo ha demostrado el testimonio de distintos colaboradores de Nixon durante las audiencias del Watergate, el gobierno tomó muy en serio a esta oposición. Así, en 1971, al aproximarse el periodo electoral, el gobierno Nixon se enfrentaba a una situación ambigua. La política de centralización de poderes en el ejecutivo, que había minado gran parte del resquicio de poder que todavía tenía el Congreso, y que había superado sobradamente a la arraigada burocracia de Washington, estaba logrando un notable éxito. La represión de los radicales mostraba signos de contribuir a la desorganización de la izquierda. Sin embargo, el gobierno todavía se sentía profundamente preocupado por la capacidad de la izquierda para oponerse eficazmente a sus planes para el futuro.

Nixon también encontró oposición a su política por parte de la extrema derecha. Los derechistas estaban en contra de la distensión con China y la Unión Soviética y presionaban para que se continuara la guerra aérea contra Vietnam del Norte, con el propósito de asegurar una colonización todavía más inhumana en el Sur. Asimismo, Nixon,

al manejar su campana presidencial por medio del Comité para reelegir al Presidente, actuó al margen de las estructuras establecidas del Partido Republicano, irritando con ello a muchos republicanos tradicionales. El FBI, interesado en mantener la supervisión de las pesquisas en el interior del país, miraba con celos las medidas represivas que se planificaban en la Casa Blanca. Nixon se vio forzado a tomar medidas contra la extrema derecha con el fin de implementar su política. Por ejemplo, ordenó grabar las conversaciones telefónicas no sólo con el propósito de interceptar la información de los críticos de la izquierda, sino también para evitar que el Pentágono pusiera en peligro la detente dejando traslucir la posición negociadora de Estados Unidos en las conversaciones del SALT. El peligro de la extrema derecha se concretó en la candidatura de George Wallace, que amenazaba con escindir el voto de la derecha y favorecer la entrada de un demócrata en la Casa Blanca en 1972.

En efecto, había una considerable incertidumbre respecto del futuro, especialmente sobre los planes para atacar al estado de bienestar. Estas incertidumbres las exacerbo notoriamente la recesión en 1969-70, la crisis monetaria internacional, y la creciente inflación que, en agosto de 1971, exigió controles de salarios y precios sin precedentes en épocas de paz. Nixon y sus colaboradores temían que la crisis económica debilitara su coalición y que provocara su derrota en la elección de 1972. Si bien había escasas dudas de que la política exterior de Nixon sería mantenida bajo casi cualquier presidente demócrata, cabía pensar que, si Nixon perdía, se produciría una notable reestructuración de la política interior. La elección de 1972 se considero como un momento clave en la política estatal. Muchos de los seguidores más fieles de Nixon pensaban que el primer gobierno de éste no había logrado más que establecer las bases para el pleno desmantelamiento del aparato federal de seguridad social. El testimonio de Mitchell, Ehrlichman y otros, durante las audiencias del caso Watergate en el senado, así como el material de las grabaciones de la Casa Blanca, mostraban sus temores de que una victoria demócrata invirtiera radicalmente esta tendencia. Estaban convencidos de que únicamente un presidente republicano podría evitar —por medio de una combinación de represión y utilización de las formas más clásicas del complejo militar-industrial— la creación de un estado de bienestar social de tipo europeo en los Estados Unidos. Sin duda estos temores eran exagerados, ya que ni siquiera George McGovern era partidario de iniciar una política radical en inversiones sociales. En cualquier caso, Nixon y sus cómplices estaban probablemente en lo cierto al vaticinar que una victoria de los demócratas habría revitalizado los programas de la Nueva Frontera y de la Gran Sociedad. La abrumadora derrota de McGovern en las elecciones nos permite

olvidar lo poco segura que parecía un año antes la reelección de Nixon. Fue la incertidumbre, unida a la importancia concedida a la reelección de Nixon por muchos de sus seguidores, lo que preparó el escándalo de Watergate.

En el pasado ha habido elecciones inciertas en que los participantes sentían que las opciones eran extremadamente importantes y, sin embargo, no se produjeron Watergates. Es poco probable que el asunto Watergate hubiera tenido lugar sin la proliferación de organismos y colaboradores presidenciales que no eran responsables ante el Congreso o la burocracia establecida, y sin la puesta en marcha del solapado aparato represivo que iba a la par con el ataque a la izquierda. Considerando este proceso y teniendo en cuenta la situación política en 1972, era fácil y tentador dirigir este aparato ilegal contra la oposición política liberal a Nixon en el Partido Demócrata. Era fácil, y el estilo paranoico que siempre ha caracterizado a Nixon convirtió esa tentación en un proyecto.

El descubrimiento de los asaltantes, y la revelación de sus lazos con el gobierno Nixon, iniciaron la transformación del proyecto en un escándalo.

## II

### EL SURGIMIENTO DEL ESCÁNDALO

El hecho concreto del allanamiento en Watergate no fue más que un elemento relativamente insignificante en la crisis política sumamente compleja conocida como el escándalo de Watergate. Muchos de los delitos del gobierno de Nixon son en realidad características absolutamente normales de la vida política norteamericana. Otros delitos son más específicos de los métodos peculiares de Nixon y sus compinches. En muchos casos, lo que es escandaloso es el nivel de la actividad delictiva más que los propios delitos. Todas las campañas presidenciales han implicado contribuciones ilegales de empresas, infiltraciones en las organizaciones de la campaña de oposición, juegos sucios de tipo diverso, y demás. Como máximo, se puede acusar al gobierno Nixon de llevar estas buenas y viejas tradiciones norteamericanas al límite. Pero no se le puede acusar de inventarlas.

El allanamiento de Watergate tuvo lugar en junio de 1972. A éste le sucedieron una serie de intentos para contener la crisis política. La sucesión de estrategias de contención es lo que habitualmente se entiende por el encubrimiento de Nixon. Esta interpretación representa una visión muy parcial del proceso político en cuestión. No sólo fueron Nixon y



sus colaboradores los que por razones políticas personales trataron de limitar la crisis. El Congreso, las distintas agencias de investigación que participaron en la ostensible exposición del escándalo, e incluso la prensa liberal, a la que tan a menudo se le atribuye el mérito de desenmascarar plenamente ante el público norteamericano el escándalo, también jugaron un papel importante en el control de la crisis. Todos estos actores políticos tenían gran interés en limitar el alcance de la crisis, en definirla en términos estrechos y, en última instancia, en convertir la crisis en una reafirmación de las virtudes del sistema norteamericano. Ocasionalmente, estos distintos actores se lanzaban unos sobre otros en una lucha maniquea del bien contra el mal; pero, en formas más sutiles, solían coincidir sus esfuerzos por mantener la crisis bajo control.

En lugar de presentar un resumen general de los acontecimientos acaecidos en el desarrollo de la crisis, trataremos de analizar, en las páginas siguientes, como intentó definir y contener la crisis cada uno de estos actores políticos. El modelo de estrategias de contención de la crisis, fallidas o con éxito, dice mucho sobre las operaciones y contradicciones del proceso de legitimación en el Estado capitalista.

### *1. La estrategia de Nixon: el encubrimiento oficial*

Nixon y sus íntimos colaboradores tenían claro el 18 de junio de 1972 que era esencial para la supervivencia política de Nixon el encubrimiento del asunto Watergate. La opción no consistía en si se debía o no enmascarar el asunto, sino en como hacerlo.

Los intentos por parte de Nixon y sus colaboradores de impedir el desarrollo de la crisis, se enfrentaron desde un comienzo con dos problemas generales. En primer lugar, muchas de las actividades en el encubrimiento tenían que ser a su vez encubiertas. El encubrimiento se convirtió en un proceso inagotable de componendas. La destrucción masiva de pruebas, el soborno de testigos, la obstrucción de la justicia, etcétera, se convirtieron con el transcurso del tiempo en cuestiones políticas más graves que el propio allanamiento. De hecho, en última instancia, Nixon no fue expulsado del gobierno por su posible participación en la planificación del asalto al cuartel general del Partido Demócrata, sino por su manifiesta participación en el encubrimiento del allanamiento y por los subsiguientes encubrimientos del encubrimiento.

En segundo lugar, muchas de las estrategias habituales de las que el ejecutivo puede normalmente disponer para contener una crisis política y para salvaguardar la legitimidad, no sirvieron en el escándalo Watergate más que para intensificar la crisis de legitimación. Una de las estrategias clásicas para enfrentarse a los problemas de la legitimación es la

creación de comisiones especiales para investigar e informar sobre los problemas en cuestión. Esta estrategia fue empleada eficazmente durante los graves disturbios en los ghettos a mediados de los años 1960 (la Comisión Kerner sobre las Causas y Prevención de la Violencia) y durante el periodo de incertidumbre política que sucedió al asesinato de Kennedy (la Comisión Warren). Las comisiones dan la impresión de que el Estado está haciendo algo respecto de una crisis cuando de hecho no emprende ninguna medida política sustantiva. Sin embargo, en el caso de Nixon, una comisión de este tipo planteaba el evidente peligro de alcanzar suficiente autonomía y no servir para restablecer la confianza en la presidencia, sino colaborar para minarla todavía más. El destino del fiscal especial muestra los problemas que encierra este tipo de estrategia.

Igualmente, Nixon no podía emplear con eficacia distintas armas ideológicas de legitimación. Mantenía que estaba protegiendo los sagrados privilegios constitucionales del ejecutivo para generaciones venideras cuando se negaba a permitir que sus colaboradores testificaran ante los jurados especiales y ante los comités del Congreso; reiteradamente reivindicó la seguridad nacional como una justificación para retener las grabaciones. Pero estas actuaciones no sirvieron más que para convencer a mucha gente de que tenía algo que esconder. Nixon prosiguió apelando al público en nombre de los intereses nacionales hasta el amargo final. Pero en la medida en que se deterioraba su credibilidad, estas declaraciones altisonantes y patrióticas no hacían más que ofrecer una imagen de él cada vez menos sincera y merecedora de confianza.

Nixon, mientras se desentrañaba el escándalo en los dos años siguientes al allanamiento, trató de protegerse culpando de los acontecimientos de Watergate a un círculo cada vez más amplio de subordinados. Inicialmente el escándalo fue considerado como “un robo de tercera categoría” y fue rotundamente rechazada cualquier forma de participación de Nixon, sus colaboradores, el Comité para Reelegir al Presidente (CREEP) o del Comité Nacional Republicano (RNC). Sin embargo, pronto quedó claro que algunos de estos ladrones de tercera categoría tenían relaciones de antiguo con el Partido Republicano y que, al parecer, el asalto había sido financiado con dinero del CREEP. De esta forma el suceso se convirtió en un alegato contra los funcionarios del CREEP en el sentido de que si bien no habían planificado ni autorizado el asalto, si habían sido negligentes en el cumplimiento de su deber para evitar que éste se llevara a cabo. En el momento de la elección parecía que se había logrado básicamente contener la crisis. Nixon felicitó a John Dean por su buen trabajo en el manejo del problema Watergate. Sin embargo, en el invierno, la estrategia comenzó a desmoronarse al aumentar la extorsión por parte de

algunos de los ladrones convictos, y al continuar ofreciendo la prensa liberal nuevas revelaciones sobre Watergate. Gradualmente quedaron implicados en el allanamiento dos miembros del CREEP, y a éstos les sucedieron miembros del entorno personal de Nixon. En marzo de 1973 se trató de convertir a Dean en chivo expiatorio, pero éste se negó a asumir el papel y posteriormente se convirtió en el principal acusador de los colaboradores más próximos de Nixon y del propio Nixon.

El resto de la historia es bien conocida. Durante las audiencias de Watergate de 1973 el escándalo se aproximó cada vez más a Nixon. El descubrimiento de las grabaciones, y los consiguientes intentos por parte de Nixon de evitar su publicación, culminaron en la "Masacre del Sábado por la Noche", la destitución del fiscal especial Archibald Cox y del ayudante del procurador general William Ruckelshaus, y en la renuncia forzosa del procurador general Elliot Richardson, lo que debilitó todavía más la ya tambaleante credibilidad de Nixon. En el invierno de 1973-74, la incapacidad del gobierno para hacer frente a la crisis energética y la creciente inflación en el interior del país socavaron aún más la base política de Nixon incluso entre sus adictos colaboradores. La clase dirigente comenzó a preguntarse si Nixon, cada vez más preocupado con el asunto Watergate, podía manejar eficazmente los problemas sociales y económicos del país. En verano de 1974, cuando el comité de *impeachment*<sup>8</sup> inició sus deliberaciones finales, nadie dudaba de la participación de Nixon en el encubrimiento. El único problema era si se podían considerar estas transgresiones suficientemente graves y si las presiones políticas eran lo suficientemente fuertes como para precipitar su destitución del cargo. Una vez que quedó claro que Nixon tendría que someterse a un juicio en el Senado, el presidente dimitió de su puesto y el drama llegó a su fin.

El encubrimiento de Nixon se convirtió en un desastre político. Entre los distintos factores que contribuyeron a su colapso, aquel que en última instancia jugó un papel más decisivo, fue la existencia de las grabaciones de la Casa Blanca. Inmediatamente después del allanamiento se había destruido una cantidad considerable de pruebas gravemente incriminatorias. Si las grabaciones no hubieran existido habría sido prácticamente imposible probar la participación personal de Nixon en el encubrimiento o en el propio allanamiento. Watergate seguiría siendo un grave engorro político, pero no habría acabado con el gobierno. Las grabaciones eran especialmente perjudiciales para Nixon porque podrían ser empleadas por el Congreso y por la prensa liberal para contener la crisis y

---

<sup>8</sup>[N. del T.] *Impeachment*, o impugnación, es un procedimiento legal norteamericano que prevé el procesamiento y en su caso la destitución de altos funcionarios del gobierno, en este contexto, del presidente.

convertir Watergate, de un juicio a un sistema político, en un ataque personal a Nixon, sirviendo con ello los intereses de la clase dominante.

## *2. La prensa liberal y el Watergate: la personalización del escándalo*

La prensa liberal jugó un papel fundamental en el surgimiento y el desarrollo del escándalo. Sin la publicación de las indagaciones realizadas por el *Washington Post* es poco probable que se hubiera producido el escándalo. La perseverancia del ataque a Nixon por parte de la prensa liberal estaba parcialmente motivada por los frecuentes ataques de Nixon contra ésta. También era consecuencia del deseo de debilitar el poder de Nixon y así desbaratar sus intentos de trastocar radicalmente la política interior norteamericana. Pero la prensa no tenía interés en convertir el escándalo de Watergate en un juicio contra la democracia norteamericana. Por lo tanto, tendió a exponer los acontecimientos de forma que se limitara el ámbito del escándalo.

Nixon y sus colaboradores han sido acusados de cientos de delitos. Los Americanos por una Acción Democrática reunieron una lista de aproximadamente 73 delitos que, en su opinión, eran los más importantes. La lista se divide en siete apartados: corrupción en el gobierno (18 acusaciones); subversión del proceso electoral (6 acusaciones); el asunto Watergate y su encubrimiento (9 acusaciones); corrupción del gobierno (16 acusaciones); violaciones de las libertades constitucionales (12 acusaciones); ilegalidades en la política exterior (6 acusaciones); y subversión de la prensa (6 acusaciones). De estos múltiples delitos únicamente unos cuantos se convirtieron en el foco central del escándalo tal y como fue presentado por la prensa. La elección de los delitos que deberían ser considerados como centrales sirvió para personalizar sustancialmente el asunto y para convertirlo en un problema de Nixon y sus hombres y no del sistema en su conjunto. Por lo tanto, la prensa destacó el papel de Nixon en el encubrimiento y la corrupción personal de éste en la apropiación de fondos para sus propiedades y en la evasión de impuestos; también destacó la prensa la entrega de fondos ilegales por funcionarios de empresas para la campaña presidencial, en lugar de centrarse en los bombardeos de Camboya, el empleo de provocadores en los grupos radicales, el Plan Huston para denegar masivamente los derechos civiles a los radicales y demás. Toda la gama de delitos encerraba el potencial — que en parte había sido puesto en práctica de socavar gravemente la legitimidad no sólo del gobierno Nixon, sino también del Estado. Con el fin de minimizar este potencial, la prensa trató de mantener el escándalo dentro de los límites de la corrupción y de la mala conducta personales.

En este contexto las grabaciones se convirtieron en el tema perfecto para ser destacado por la prensa en la conformación del escándalo. Las cintas consistían en verdaderas grabaciones de las conversaciones de Nixon con sus colaboradores. Simbolizaban la egolatría de Nixon y su estilo personal de hacer política. Se podía caracterizar la lucha constitucional en torno a las grabaciones como Nixon el individuo que se opone al procedimiento legal del sistema. Cuando, en la primavera de 1974, Nixon se adelantó a la requisitoria de las cintas por el tribunal, dando a conocer las transcripciones alteradas, casi se produjo un lamento en la prensa liberal porque este acto impedía la confrontación final entre el sistema (la Suprema Corte) y el transgresor individualizado. La prensa hizo todo lo posible por convertir a Nixon en el demonio, de forma que el oportuno exorcismo, su destitución, pudiera convertirse en el instrumento restaurador de la confianza en el sistema. Cuando Nixon dimitió en agosto, atajando de esta forma la purificación ritual de un proceso legal de destitución (*impeachment*), y especialmente cuando Ford concedió un perdón incondicional a Nixon, se produjo una profunda indignación en los círculos liberales. No es tanto que desearan ver correr la sangre de Nixon, sino que más bien muchos liberales creían que únicamente se podría restablecer la confianza en el sistema norteamericano de justicia por medio de un procedimiento legal.

### *3. El congreso y el escándalo*

Hasta cierto punto, los esfuerzos del Congreso por detener la crisis política eran paralelos a los de la prensa. La mayoría de los miembros del Congreso querían que la investigación se limitara a las cuestiones de corrupción e indecoro político. Únicamente unos cuantos miembros del Congreso del ala izquierda del Partido Demócrata trataron de mantener vivos temas tales como los bombardeos de Camboya. Pero incluso éstos tendían a considerar estas cuestiones como delitos personales de Nixon y no como resultado del imperialismo norteamericano.

Las dos etapas claves en la participación del Congreso en el asunto Watergate fueron las audiencias senatoriales transmitidas por televisión en el verano de 1973 y las audiencias sobre el *impeachment* iniciadas en febrero de 1974 que culminaron en las audiencias televisadas en julio de ese mismo año. En muchos sentidos, las audiencias del Senado sobre el asunto Watergate fueron el punto central en el desarrollo del escándalo. El propósito de estas audiencias era convertirlas en la culminación de todo el asunto. Ofrecieron a los políticos del Congreso la oportunidad de expresar públicamente su

sorpresa e indignación ante el comportamiento de las distintas personas implicadas en el escándalo y así poder designar ese comportamiento como desviado, como si estuviera al margen de la práctica política normal y aceptada. Las sesiones públicas de la audiencia tenían que ser cuidadosamente controladas; todos los testigos eran interrogados a puerta cerrada antes de aparecer en televisión, y los miembros del comité trataron de proceder en un espíritu de armonía y cooperación. En resumen, las audiencias del asunto Watergate tenían como fin clausurar la crisis creando la apariencia de ventilar plenamente todos los hechos del caso. El resultado fue un moderado rapapolvos, cierto embarazo político para el presidente, y tal vez algún supuesto intento de campaña en pro de la reforma de la legislación.

Pero las cosas no salieron exactamente como se deseaba. Para que las audiencias sirvieran de vehículo de relegitimación era necesario que al menos tuvieran una apariencia de procedimiento legal, de una absoluta veracidad, y que los interrogatorios fueran formales. Unas audiencias perfectamente orquestadas y manipuladas resultarían demasiado transparentes. Además, muchos de los miembros del comité consideraban las audiencias como una oportunidad para hacerse de renombre político, para crearse una reputación de político honesto, dedicado a descubrir la verdad sobre el asunto Watergate. Y sin duda, había al menos algunos miembros del comité que estaban honestamente indignados por las transgresiones a la Constitución por parte del gobierno Nixon, que sinceramente creían en las normas de una audiencia veraz, abierta e íntegra, y que por ello se tomaron su tarea de indagadores con absoluta seriedad. El resultado fue que las audiencias tomaron vida propia y cierto grado de autonomía estructural que no podía ser manipulado conscientemente entre bambalinas. Según avanzaban, el escándalo se aproximaba cada vez más al presidente. Las contradicciones en los testimonios eran tan grandes que las audiencias planteaban más problemas de los que resolvían. Y, sobre todo, demostraron la existencia de las cintas, lo que significó que el interrogatorio de testigos no podría clausurar el asunto. Las exigencias de legitimidad en una democracia burguesa —procedimiento legal, honestidad, sinceridad, etcétera—, dificultaron extremadamente que las audiencias resolvieran por sí solas la crisis y que, de esta forma, se restableciera la legitimidad.

Cuando se clausuraron las audiencias, la mayoría de los miembros del Congreso seguían pensando que, como máximo, Nixon había cometido una serie de indiscreciones. Había poco ambiente para el *impeachment*. Incluso en febrero, cuando comenzaron las audiencias para la destitución, poca gente confiaba en que el comité judicial recomendará

este procedimiento y, aún menos, que la Cámara votara el *impeachment* y enviara a Nixon al Senado para ser juzgado. Pero esta situación agudizó las contradicciones inherentes al proceso de legitimación. Las audiencias del asunto Watergate en el Senado no habían dirimido el escándalo; más bien habían abierto la puerta para que se ampliara la crisis política. Simultáneamente, se estaban comenzando a manifestar otros problemas del sistema con la crisis energética y la inflación galopante. Por un lado, Nixon era incapaz de resolver sus propios problemas políticos y los problemas mayores del sistema. Por otro, pocos miembros del Congreso estaban dispuestos a procesarlo. El empeoramiento de la crisis económica exigía acción y las cintas probaron ser un buen vehículo para hacerlo.

Las audiencias públicas en julio de 1974 ilustran perfectamente el proceso de relegitimación. En casi todas las declaraciones iniciales, se apelaba a las sagradas tradiciones políticas de los Estados Unidos y a la necesidad de reafirmar nuestra fe en la Constitución. Tanto los seguidores como los enemigos de Nixon se lamentaban de la pérdida de confianza en el sistema de justicia norteamericano que había acompañado al escándalo de Watergate, y todo el mundo mantenía que una vez resuelto del todo este asunto se volvería a restablecer la fe. El comité mantenía unánimemente la creencia de que las audiencias del procesamiento limpiarían el sistema y acabarían con el problema. Además, al limitar los artículos del procesamiento al encubrimiento del asalto, y a la obstrucción de la justicia por el propio Nixon, al tiempo que se excluía cualquier otra cuestión política de mayor envergadura, el comité mantuvo el esfuerzo por definir la crisis en los reducidos términos personales de corrupción y mala conducta.

La situación, en el verano de 1974, representaba tanto la continuación de las condiciones del verano anterior, cuanto un giro decisivo en las mismas. En ambos casos el Congreso quería contener la crisis política de Watergate y proteger en la mayor medida posible la legitimidad del sistema político, definiendo la crisis en términos personales. Pero mientras que en el verano de 1973 esta delimitación de la crisis implicaba probar la responsabilidad de los colaboradores de Nixon al tiempo que dejaba a Nixon fundamentalmente incólume, el mismo hecho en 1974 implicaba deshacerse asimismo de Nixon. Una vez realizado esto, el nuevo presidente fue recibido con los brazos abiertos y casi todo el mundo anunció que por fin se podía volver al funcionamiento normal del gobierno del país.

#### *4. Los organismos investigadores y el escándalo*

La misma historia básica que hemos contado sobre la prensa y el Congreso puede aplicarse a los organismos investigadores creados para enfrentarse con el escándalo y, en particular, a los fiscales especiales. Tanto Archibald Cox como León Jaworsky consideraban que su obligación se limitaba a investigar las distintas responsabilidades personales en el caso Watergate y en el encubrimiento del mismo. Cox mantenía públicamente, incluso después de su dimisión del puesto, que la existencia del puesto de fiscal especial demostraba que los Estados Unidos seguían siendo una democracia, que a pesar de las actuaciones de Nixon la Constitución mantenía su integridad y que en su momento la situación se resolvería según el oportuno procedimiento legal. Sin embargo, como en el caso de las audiencias del Congreso, el proceso de relegitimación que implicaba la creación de un fiscal especial encerraba sus propias contradicciones. El fiscal especial solamente podía confiar en restablecer la fe en el sistema prosiguiendo con la investigación, pero esta investigación a su vez corría el riesgo de descubrir actividades que podrían minar todavía más la legitimidad de la presidencia.

### III

#### CONCLUSIONES

##### 1. *Interpretaciones alternativas del caso Watergate*

Existe una interpretación alternativa del caso Watergate que ha conseguido bastante popularidad entre los marxistas. Esta interpretación considera Watergate como una consecuencia directa de conflictos antiguos en el seno de la clase dirigente. Existen dos versiones de esta posición. La primera define a los antagonistas como Yanquis (sobre todo los intereses financieros y empresariales del noreste; el viejo capital con orientación europea que ha dominado en los dos principales partidos políticos desde la segunda guerra mundial) y Cowboys (principalmente del sur y del oeste, con intereses en la agricultura, en los recursos naturales y en la producción militar; el nuevo capital, frecuentemente dependiente de la generosidad del gobierno, como en el caso de las concesiones de petróleo y de los precios en la agricultura; estos intereses tienen una orientación derechista y han sido sustentadores tradicionales de Nixon).<sup>9</sup> La segunda versión define a los antagonistas en términos de los grupos de interés financiero. Un grupo de interés financiero es una coalición de unidades de capital bajo la dirección general de un grupo dominante de

---

<sup>9</sup> Para una exposición de la tesis Yanqui-Cowboy consúltese Carl Oglesby, en *Ramparts*, noviembre de 1973 y Kirpatrick Sale, "The World Behind Watergate", en *The New York Review of Books*, 3 de mayo de 1973



capitalistas financieros. Existe más de una docena de grupos de interés identificados, sobre todo a nivel regional. Los grupos Morgan y Rockefeller son los mayores y se han impuesto a nivel nacional.<sup>10</sup>

En ambas versiones Watergate representa el intento por parte de una facción minoritaria de la clase dirigente por conseguir el control total del aparato estatal, tras haber introducido un pie en el umbral con la elección de Nixon en 1968, hecho que fue consecuencia de una coalición de facciones minoritarias y mayoritarias. El desenmascaramiento del escándalo es por lo tanto la contraofensiva de los yanquis o grupos financieros para desalojar a los advenedizos. Los conflictos entre estos grupos son en parte políticos (por ejemplo, la imagen de los Cowboys en política exterior es de halcones, en contraposición a la de los Yanquis más conciliadores) y en parte sobre la cuestión de que capitalistas tendrán acceso al Estado con el propósito de aumentar su propio capital.

No hemos intentado ofrecer una crítica exhaustiva de estas interpretaciones, aunque nuestra propia interpretación sugiere los siguientes puntos:

1] Concedemos mucha mayor importancia a las contradicciones estructurales en cuyo marco transcurren los acontecimientos, que a los orígenes personales y a las relaciones de Nixon y su grupo. Únicamente la familiarización con los factores estructurales nos permitirá explicar por qué Nixon, básicamente un "cowboy", implementó una política exterior "yanqui", concediéndole una prioridad total. Fue la incapacidad de Nixon para ponerla en práctica, y no su falta de voluntad, lo que obligó a los "yanquis" a enfrentarse.

2] Las interpretaciones Yanqui-Cowboy y de los grupos de interés financieros hacen hincapié en destacar los conflictos por la obtención de favores especiales del Estado; por ejemplo, el cambalache de contribuciones para la campaña presidencial a cambio de medidas gubernamentales sobre las leyes antitrust y los precios, y los acuerdos relativos a propiedades que implican a Nixon y su camarilla. Sin duda, este es un aspecto válido, pero tenemos la impresión de que estos conflictos no explican suficientemente la gravedad de la crisis. Watergate no fue solamente un conflicto entre facciones de la clase dirigente: el escándalo creó un grave problema de legitimación para la clase dirigente en su conjunto, problema que estaba ligado a la creciente incapacidad de Nixon para enfrentarse con los problemas estructurales. Esto explica por qué fue destituido el propio Nixon, en lugar de

---

<sup>10</sup> Como ejemplo de la teoría de los grupos de interés financiero, véase S. Menshikov, *Millanaires and Managers*, Ediciones Progreso, Mosel, 1969; Víctor Perlo, *The Empire of High Finance*, International Publishers, Nueva York, 1957; y Paul Sweezy, "Interest Groups in American Economy" en *The present as History*, MR Press, Nueva York, 1953. Para un ejemplo específico de este enfoque aplicado a la crisis Watergate, véase "From Wall Street to Watergate: The Money Behind Nixon", *NACLA'S Latin America and Empire Report*, noviembre de 1973, y varios editoriales de Carl Davidson en *The Guardian* (N. Y.) durante el periodo de Watergate.

simplemente destituir a algunos de sus subalternos y esperar a la elección de 1976 para remplazar a Nixon.

3]La tesis Yanqui-Cowboy es empíricamente débil. El capital "Cowboy" esta frecuentemente vinculado al capital "Yanqui" por medio de consejos directivos intercambiados, la propiedad de acciones, las empresas "holding" y las concesiones de créditos de banqueros "yanquis". También hay, en el mejor de los casos, escasos datos que prueben una división radical en la orientación de la política exterior de las dos facciones. Los "Yanquis" pueden ser tan "halcones" como los "Cowboys". Después de todo, fue el grupo "yanqui" que rodeaba a los presidentes Johnson-Kennedy el que presionó para enviar un número cada vez mayor de tropas de combate durante la guerra de Vietnam y el que creó las técnicas de contrainsurgencia y de guerra limitada.

En resumen, mientras que las interpretaciones Yanqui-Cowboy y de los grupos de interés financieros, al igual que nuestro análisis, consideran las divergencias en la clase dirigente, nosotros creemos que estas divergencias no pueden ser entendidas más que analizando la crisis internas e internacional de finales de los años sesenta y comienzos de los setenta: crisis motivada por la creciente fuerza del nacionalismo y la revolución en el tercer mundo, por la intensificación de la rivalidad con Europa y Japón, la continua internacionalización del capital norteamericano, y los movimientos de protesta y de lucha de clases que produjeron una crisis de autoridad en los Estados Unidos.

Las tesis Yanqui-Cowboy, y tesis de los grupos de interés financieros establecen una identificación simplista entre el personal del ejecutivo y los intereses económicos que supuestamente representan. Por el contrario, nuestro análisis ha subrayado que los grupos que favorecen opciones alternativas en la política estatal son coaliciones de intereses económicos y tendencias ideológicas distintas y a menudo conflictivas, que no representan necesariamente los intereses de un sector bien definido de la economía. Watergate, un periodo de crisis política y económica, incrementó la autonomía de estas facciones políticas.

Nuestra descripción del desarrollo del escándalo de Watergate también muestra la autonomía relativa de los procesos políticos. El escándalo desarrolló su propia lógica y, con el transcurso del tiempo, exigió medidas más drásticas de las que inicialmente pretendían los dirigentes políticos. Pero aunque el proceso de legitimar al gobierno tendía a descubrir nuevos hechos que agudizaban el escándalo, había fuertes presiones contrarias por parte de los medios liberales de comunicación y por parte de los dirigentes políticos para delimitar el ámbito del escándalo a los delitos personales y abusos de poder de Nixon,

relegando las más importantes cuestiones económicas y políticas. Watergate es un excelente ejemplo de cómo el Estado desvía la atención hacia algunos problemas limitados e ignora o reprime soluciones que trastornan la economía o la legitimidad de la política.<sup>11</sup>

## *2. El conflicto económico a partir de Nixon y la estrategia para la izquierda...*

En la mañana del 9 de agosto de 1974, el presidente Ford anunció solemnemente que se había acabado la pesadilla de Watergate. Nixon y sus consejeros habían sido expulsados del gobierno y habían caído en desgracia política. Pero, en poco tiempo, con el declive en el PNB, en el mercado de capital, y con la caída en picada de su posición en las encuestas Gallup, el presidente Ford descubrió la misma crisis económica y de legitimidad que había impedido continuar en el gobierno a los dos presidentes anteriores. La remoción del grupo "Cowboy" que circundaba a Nixon y la sustitución del grupo de interés financiero dominante representado en el ejecutivo no contribuyeron en nada a solventar los problemas estructurales con que se enfrentaba el Estado norteamericano y que continuarán conformando la política del gobierno.

Ford ha tratado de legitimar su gobierno por medio de respuestas aisladas a los grupos de interés pluralistas. (Como lo ejemplifican los debates económicos del otoño de 1974). Pero los problemas económicos que asolaron a sus predecesores le han impedido hacer ninguna concesión que implique a los fondos federales. Cabe pensar que las medidas políticas del gobierno de Nixon, oponerse a las demandas presupuestarias y manipular simbólicas reivindicaciones negativas, continuaran con Ford.

Es probable que en los próximos meses la inflación y el continuo empeoramiento de la recesión conduzcan a una revitalización de costosas reivindicaciones sobre el presupuesto federal. El costo de los servicios estatales existentes continúa aumentando a causa de la inflación. En la medida en que la inflación erosiona el nivel de vida de los trabajadores y de los pobres, éstos se ven forzados a recabar ayuda del presupuesto del Estado. La reducción en el consumo popular, dietada por el elevado costo del petróleo y la necesidad de obtener altos beneficios y nuevas inversiones de capital, producirá un aumento de las demandas sobre el Estado para su compensación. Desgraciadamente para los republicanos, la base de apoyo de Nixon y Ford, los trabajadores de cuello aún residentes en barrios

---

<sup>11</sup> Claus Offe ha desarrollado en una serie de artículos una teoría de los "mecanismos selectivos" institucionalizados en el aparato de Estado que sirven para excluir de la política estatal aquellos problemas y soluciones que entorpecen el proceso de acumulación y que socavan la legitimidad política. Véase Offe, "Political Authority and Class Structure", *International Journal of Sociology*, vol. 2, n. 1, 1972.

periféricos, los pequeños comerciantes y la clase media baja, comprenden a muchos de los grupos más duramente golpeados por la inflación, la recesión y la exportación de puestos de trabajo por las empresas multinacionales.

Si el gobierno se somete a las crecientes demandas, es probable que se exacerben los problemas económicos. Un aumento en los gastos y en el déficit del Estado acelerará la inflación y la crisis fiscal; las peticiones de subsidios y de concesiones especiales son un obstáculo para ejercer una política unívoca, los programas que favorecen a los pobres y a los trabajadores interfieren con la disciplina laboral y reducen los fondos destinados a inversiones. Por lo tanto es probable que la administración Ford continúe resistiéndose a las exigencias de gastos sociales.

Nuestro análisis de Watergate plantea algunas cuestiones claves que no han obtenido respuesta por la izquierda. ¿Se puede desarrollar una coalición política para hacer frente al presupuesto estatal que actualmente satisface las necesidades del gran capital, de los negocios agrarios y del complejo industrial-militar? Los grupos opuestos a las medidas presupuestarias de Nixon-Ford se han enfrentado entre sí numerosas veces en el pasado: la clase trabajadora sindicalizada y no sindicalizada, los negros y otras minorías oprimidas, los estudiantes, las mujeres, etcétera. ¿Con qué grupos debería trabajar más estrechamente la izquierda? ¿Cómo podría manejar la izquierda las luchas en torno al presupuesto y otras medidas gubernamentales para construir un movimiento socialista con una amplia alianza de clase? ¿Cómo hará la izquierda para sacar provecho de los escándalos de la ITT y de los precios de la leche, así como de otras recientes manifestaciones de las conexiones existentes entre determinados grupos empresariales, los partidos políticos y el Estado? Si no son utilizados por la izquierda, estos escándalos serán empleados para justificar los proyectos liberales institucionales en pro de la centralización de poderes en el ejecutivo. Los liberales, pretendiendo representar los intereses públicos y abogando por aislar a los políticos corruptos de los órganos de decisión, propondrán una mayor concentración de poder en los altos estratos del ejecutivo federal.

Finalmente, en ausencia de soluciones estructurales satisfactorias a la crisis actual, ¿qué posibilidades existen de que se tomen medidas represivas extremas? Es probable que se traten de implementar tales medidas en un intento por aniquilar la militancia de la clase trabajadora motivada por los incrementos forzados en la productividad y por las restricciones en el consumo.

Estos problemas deben ser analizados en profundidad con el fin de lograr una comprensión de la dinámica de la actividad del Estado. Esperamos que nuestro análisis de

Watergate contribuirá a plantear a nivel internacional estos problemas, que creemos son cruciales en la determinación de la estrategia de la izquierda en los años setenta.

[Publicado en *Kapitalistate*, n. 3, San Francisco, primavera de 1975. Traducción Josefina Rubio.]